

## EL PROBLEMA DE LA BASE ATLANTICA DE KEFLAVIK

El problema planteado en torno a la base militar de Keflavik, en Islandia, como consecuencia de la política revisionista triunfante en el Parlamento de 24 de junio, dista mucho de ser un problema ceñido exclusivamente al choque de ciertos intereses nacionales de la pequeña República y de los intereses estratégicos de los Estados Unidos. La cuestión, en realidad, tiene una dimensión internacional que no debe ser olvidada en el momento actual.

La tendencia favorable a una revisión del Tratado concluido entre Islandia y los Estados Unidos el 5 de mayo de 1951, por el cual el Gobierno islandés dió su autorización para que los Estados Unidos, "en nombre de la Organización Atlántica", mantuviesen sobre el territorio insular una base militar, se había venido manifestando hacía tiempo, cada vez con más fuerza, en la opinión pública del país. Contribuían paralelamente a ello, de un lado la actividad propagandística filocomunista y antioccidental que, aunque escasa en la isla, se abría camino al apoyarse en razones de interés nacional; de otro, el sentimiento de independencia y de abstención muy difundido en los países escandinavos, que pone en una misma línea de actitud, aunque en distinto grado, a Islandia, Dinamarca y Noruega.

El desenvolvimiento de esta tendencia hizo que en la primavera de 1956 la disputa sobre la presencia de las tropas norteamericanas en el territorio, pasase a ser el tema central de la política nacional, enfrentando a los partidarios de la coalición gubernamental, conservadores y progresistas agrarios, hasta dar al traste con tal coalición. En efecto, llevada la cuestión al Parlamento, éste aprobó una resolución el 28 de marzo por 31 votos contra 18, en la que, sin perjuicio de subrayarse la fidelidad de Islandia a la alianza atlántica, se pedía la retirada de las fuerzas norteamericanas, por cuanto su presencia en la isla —se decía— no está ya justificada en la actual situación internacional, y, en consecuencia, se pro-

ponía a los Estados Unidos la modificación del Tratado mediante directas conversaciones con el Gobierno islandés. En el seno del Parlamento, el sector progresista del Gobierno, en el que figuraba el propio ministro de Asuntos Exteriores, Gundmundsson, se adhirió a los partidos de la oposición (social-demócrata, comunista y partido de la defensa nacional), quebrando así la unidad del Gabinete y obligando al primer ministro conservador, Thors, a presentar la dimisión del mismo. El *Althing* fué disuelto y convocadas elecciones el 24 de junio para elegir la nueva Asamblea parlamentaria.

Como consecuencia de estas elecciones, el partido conservador perdió dos puestos de los 21 que tenía, y los otros partidos experimentaron un leve aumento, pasando los progresistas agrarios de 16 a 17 puestos, los socialdemócratas de 6 a 8 y el frente popular (comunista) de 7 a 8, a excepción del partido de defensa nacional, formado poco antes de las elecciones de 28 de junio de 1956 al agruparse varios disidentes comunistas, que perdió los únicos dos puestos que tenía. Es decir, el nuevo *Althing* significó el triunfo de los partidos que propugnaban la retirada de las tropas extranjeras y la consiguiente modificación del Tratado de 1951, de donde que el Gobierno formado por el progresista Jonasson se dispusiera a alcanzar ese objetivo.

Naturalmente, los comunistas apoyaron al nuevo Gobierno para servir a la política antioccidental de Moscú, encaminada siempre a buscar las posibilidades de debilitar pacíficamente el sistema defensivo atlántico. Sin embargo, no debe ocultarse que por parte de agrarios y socialdemócratas existían razones de interés nacional que no podían por menos de tener un eco considerable en la opinión del país. Se trataba principalmente de razones de tipo económico que venían a aliarse con el celoso espíritu de independencia nacional de Islandia, herido inevitablemente por la presencia de soldados extranjeros. Así, por ejemplo, la sustracción de mano de obra a la agricultura y a la pesca, como consecuencia del empleo de operarios del país en el mantenimiento de la base militar, hecho éste que hizo reaccionar de manera particular al partido progresista agrario, que descansa en una base social constituida casi exclusivamente por trabajadores agrícolas o de la industria pesquera, agrupados en organizaciones cooperativas muy perfectas.

Todo este proceso revisionista fué observado con evidente alarma por parte de los Estados Unidos. No se escapaba a Wáshington la importancia que podía tener la efectiva evacuación de las tropas norte-

americanas destacadas en la base de Keflavik. Razones estratégicas de indudable peso desaconsejan la eliminación de una base situada en un punto clave del Atlántico Norte, verdadero observatorio avanzado, que además garantiza la seguridad de un territorio desprovisto de defensas militares propias y por tanto a merced del primer ataque de un agresor eventual. No menos se consideraba desde Wáshington la necesidad de evitar que los propósitos del pueblo islandés ocasionaran una fricción en las relaciones entre dos miembros de la alianza atlántica, tan necesitada ésta de hacer todo lo posible para evitar disensiones entre Estados empeñados en un mismo objetivo defensivo, y que tantas repercusiones podían tener en la unidad de acción occidental. Chipre es un buen ejemplo, al enfrentar a Grecia y a la Gran Bretaña, de cómo puede surgir de una cuestión nacional un problema de política internacional occidental, y por ello ocasionarse una fisura en la cadena de defensa con que Occidente intenta rodear la periferia del mundo comunista. De aquí que el Gobierno de los Estados Unidos se orientara en el sentido de no negar a Islandia las conversaciones que pedía, con el ánimo de poder conducir las hábilmente e impedir que de ellas saliera la retirada de sus tropas del territorio islandés.

El Departamento de Estado publicó el 3 de agosto el texto de una recomendación que el Consejo Atlántico envió el 26 de julio a Islandia y a los Estados Unidos para precisar su oposición a la petición islandesa de retirada de las fuerzas armadas de la base de Keflavik. En esta recomendación el Consejo insiste en la necesidad de que no disminuya la contribución defensiva que deben prestar todas las naciones del Pacto. Haciendo alusión a la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de los 15 países miembros, celebrada en París en el mes de mayo, se recuerda que en el comunicado de aquella reunión "se reafirmaba que las razones por las cuales había nacido la alianza atlántica, no habían desaparecido y que la seguridad atlántica continuaba siendo un problema fundamental". Como quiera que en Islandia se había argumentado, partiendo de la base de que la situación internacional había evolucionado favorablemente a consecuencia de los recientes acontecimientos internos de la Unión Soviética, la recomendación del Consejo sale al paso de esto, diciendo: "debe reconocerse que es demasiado pronto todavía para poder precisar el verdadero significado de tales evoluciones y para concluir que nuestras comunes defensas pueden ser reducidas". El anuncio

de la Unión Soviética de que quiere reducir el número de hombres bajo las armas, no es más que una medida unilateral que no garantiza ni su eficacia ni que pueda ser neutralizada por otra decisión igualmente unilateral. En todo caso, la capacidad ofensiva —destaca el Consejo— de la Unión Soviética, permanece intacta. En consecuencia, la fuerza defensiva de la alianza debe continuar y por ello no debe pensarse en eliminar las tropas estacionadas en Islandia, tanto por razones de seguridad colectiva como de seguridad del propio país islandés.

La recomendación del Consejo es indudablemente expresiva del criterio con que los representantes norteamericanos se dispusieron, a mediados de noviembre, a iniciar las conversaciones con el Gobierno de Islandia. Las negociaciones se desarrollaron a un ritmo acelerado y el 24 del mismo noviembre se llegaba a un acuerdo por el que se decidía la permanencia de las tropas de los Estados Unidos en la base aérea de Keflavik. Por tanto, el Gobierno progresista de Jonasson ha abandonado la decidida posición revisionista que en un principio le había movido, y parece que este cambio de actitud debe ser atribuido tanto a las razones contenidas en la recomendación señalada del Consejo Atlántico, como al posible eco alcanzado entre la opinión del pueblo islandés por los acontecimientos internacionales más recientes, y que han elevado hasta un grado antes no alcanzado, el clima de tensión mundial y la conciencia de la inseguridad en las relaciones entre Este y Oeste.

El 6 de diciembre se efectuó en la capital de Islandia un doble cambio de Notas entre los Gobiernos de los Estados Unidos y de Islandia, publicándose una declaración en relación con la permanencia de las tropas norteamericanas. En esta declaración se informa que ambos Gobiernos han convenido suspender, en atención a los recientes acontecimientos internacionales y la situación mundial de ellos derivada, las conversaciones iniciadas sobre esta cuestión y el mantenimiento de la base militar. Se crea un Comité permanente, formado de no más de tres representantes de cada Gobierno, para la defensa de Islandia, con la misión de estudiar las exigencias de dicha defensa a la luz del desenvolvimiento de la situación internacional, y de hacer recomendaciones a los dos Gobiernos para la solución de los problemas que se planteen. Por último, se alude en la declaración al acuerdo tomado por ambas partes, de aplicar el mecanismo de preaviso de seis meses, establecido en el art. 7.º del Tratado de 1951 cuando uno de los dos Gobiernos así lo estime necesario. Con arreglo a lo estipulado en dicho artículo, las partes pedirán la in-

tervención del Consejo Atlántico para revisar el contenido del Tratado, y si a los seis meses no se ha tomado una determinación convencional, cualquiera de ellas puede anunciar su intención de poner fin a la validez del Tratado en el término de un año.

De este modo ha quedado provisionalmente solucionada una cuestión que parecía amenazar la permanencia de tropas norteamericanas en la base atlántica más septentrional, que contribuye por su alto valor estratégico, a garantizar la seguridad del Atlántico Norte.

Fernando MURILLO RUBIERA

